

XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán, 2007.

Un gobierno de fuerza y misericordia. Los socialistas ante los primeros años de política obrera radical.

Autores.

Cita:

Autores (2007). *Un gobierno de fuerza y misericordia. Los socialistas ante los primeros años de política obrera radical. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-108/540>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

**XI° JORNADAS INTERESCUELAS/ DEPARTAMENTOS DE HISTORIA
Tucumán, 19 al 21 de Septiembre de 2007**

Mesa temática abierta n° 61: Los partidos de izquierda en la sociedad argentina, 1890-1960

Título: Un gobierno de fuerza y misericordia. Los socialistas ante los primeros años de política obrera radical.

Autor: Martínez Mazzola, Ricardo Hernán.

Universidad, Facultad y Dependencia: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones “Gino Germani”.

Investigador Asistente CONICET. Jefe de Trabajos Prácticos (FFyL-UBA).

Pasaje del Buen Orden 1931. Ciudad de Buenos Aires. 4923-7682. ricardomm17@yahoo.com

Desde sus primeros días los socialistas mostraron dificultades para definir al radicalismo. Antes de fundarse el partido los primeros grupos socialistas plantearon una caracterización ambigua pero no del todo desfavorable de dicha fuerza a la que identificaban con la defensa de la pequeña burguesía y de la que rescataban parcialmente el liderazgo de Alem. Esta caracterización, que empezaría a ser dejada de lado al adherir los socialistas a una mirada histórica que disminuía el papel de las clases medias, terminaría de abandonarse luego del suicidio de don Leandro. La consiguiente disolución de las fuerzas radicales hizo que los socialistas consideraran a esta fuerza como un resabio del pasado y su reaparición a partir de 1905 no modificó las cosas. Para la visión evolucionista de la historia que adoptaban los socialistas lo que había desaparecido era parte del pasado y no podía volver, si lo hacía era como un atavismo que no podía durar. No parecía haber más ambigüedades: los radicales eran caracterizados como una fuerza más de la política criolla personalista e inorgánica, lo que se agravaba por el hecho de que su principal carácter diferencial era su espíritu “motinero” y su prédica antielectoral. Hacia fines de la década del siglo los socialistas agregarían a esas críticas la de las cercanías del radicalismo primero con Figueroa Alcorta y luego con Roque Sáenz Peña. Pero la reforma impulsada por éste tendría importantes efectos sobre la competencia política potenciando las fuerzas radicales y haciendo de estas fuerzas los principales contendientes electorales en la Ciudad de Buenos Aires. Esta rivalidad haría que los socialistas empezaran a poner en un segundo plano a las otras fuerzas de la “política criolla” para centrar progresivamente su mirada en el radicalismo pretendiendo “desenmascarar” su pretendido carácter popular.

El enfrentamiento sería alimentado también por el “antisocialismo” de los radicales. Ante el sorprendente triunfo socialista en las elecciones complementarias de 1913 los radicales responderían denunciando un acuerdo “conservador-socialista” y señalando el carácter extranjero de los socialistas. La respuesta de los socialistas sería acentuar las críticas al patriotismo radical a la vez diferenciar entre un “nacionalismo verbal cultivado por los militares de revuelta que coquetean con los radicales” (LV, 13-5-13) y el “patriotismo de buena ley”, denunciando que son “los peores elementos del viejo régimen... que han hipotecado el país al capital extranjero... y reconocen la soberanía espiritual del Vaticano” los que apelan al patriotismo profanando la palabra “patria” y manchando la bandera (LV, 21-5-13).

A comienzos de 1915 las duras condiciones económicas generadas por la guerra y las malas cosechas colocaron en el centro de la discusión la cuestión de la “carestía de la vida” y las respuestas con que afrontarla. Al hacerlo los socialistas cuestionarían el carácter popular del radicalismo y sus modos de “acción social”. Mientras los socialistas, abandonando su tradicional librecambismo, proponían afrontar la cuestión adoptando un impuesto a las exportaciones de trigo y carnes de modo de disminuir el precio de esos artículos en el mercado interno;¹ la respuesta de los radicales no consistía en la adopción de medidas legislativas sino en la organización de una red de distribución de pan “pan bazo” y carne a bajo precio.²

La cuestión obrera ante las elecciones presidenciales

Al transcurrir 1915, y acercarse las elecciones presidenciales, los socialistas incorporaron otro tópico a su discurso de desenmascaramiento: el supuesto “obrerismo” de los radicales. El primer blanco de la crítica sería el apoyo que los diputados de esta fuerza dieron al artículo que quitaba la jubilación derecho a los trabajadores ferroviarios que participaran de huelgas. Esta conducta se explicaba, según un Editorial que el diario socialista publicaba el 23 de junio, porque los miembros de esa fuerza buscaban mostrarse como “hombres de orden” de modo de

¹ Al respecto presentarían un proyecto en la cámara de diputados. Cuando el gobierno lo ignoró clausurando las sesiones extraordinarias, el PS lanzó una campaña de agitación que incluía la publicación de manifiestos, la firma de peticiones y la realización de un gran acto público que tuvo lugar a fines de febrero de 1915.

² Los socialistas consideraron la iniciativa radical como un intento de imitarlos y ocultar el silencio parlamentario de los radicales y denunciaron que el pan elaborado por los radicales “con los residuos del grano” era antihigiénico y poco alimenticio. La Vanguardia afirma que una vez que el radicalismo salía de su terreno, e intentaba ocuparse positivamente de la salud del pueblo lo que hacía era ofrecerle “alimentos inferiores” (LV, 2-3-15). Semanas más tarde el diario socialista cuestionaba las iniciativas radicales, lideradas por el diputado Tomás Le Bretón quien operando como “generalísimo del ejército de la salvación” organizaba la acción social de los radicales para la que solicitaba ayuda a panaderías, frigoríficos, ingenios, etc. La caracterización elegida no era casual sino que pretendía sintetizar la que, para los socialistas, era la forma en que los radicales percibían la cuestión social: “Para el señor Le Bretón, que es el sentido común del radicalismo, la carestía de la vida es, pues, una bagatela, una cuestión sentimental que puede resolver en cualquier momento la caridad cristiana de los señores propietarios... Todo consiste en tener el coraje y el descaro del partido radical para salir por esas calles en tren de pordiosero...o de ‘pechador’”. (LV, 27-3-15)

convencer a las clases conservadoras, que aún temían su irrupción en el gobierno, de que sus temores eran infundados. Los radicales, continuaba explicando el Editorial, no estaban bien ni en su papel de hombres de orden ni en el de “reformadores o competentes en legislación obrera”, por ello incurrían en contradicciones como la de su periódico que decía que la ley hubiera sido mejor sin el artículo 11º que ellos habían contribuido a implantar. El pueblo trabajador, concluía confiado el Editorial, no olvidaría contradicciones tan burdas.

Meses más tarde La Vanguardia subrayaba que el mal ejemplo establecido por la ley de jubilaciones cundía –en esos días la compañía de tranvías del Sur proponía un régimen de jubilaciones similar al de los ferroviarios- por lo que responsabilizaba a los radicales. Trazaba asimismo una evaluación descarnada de las iniciativas sociales de esta fuerza señalando que sus miembros, aunque abominaban del socialismo, decían ser los únicos que lo llevaban adelante en forma práctica. Ese “socialismo práctico”, recordaba, había sido inventado por Le Bretón “para disminuir el ruidoso fracaso de la actuación parlamentaria” radical a través de la venta a bajo precio “de pan indigesto, carne con garrapata, leche almidonada”. Cuando esta iniciativa no rindió efecto, continuaba el artículo, se le había encomendado a Rogelio Araya la elaboración de un “socialismo más alto”, tarea a la que éste había dado curso produciendo un pensamiento “trascendental y profundo” formado por “elucubraciones incomprensibles y misteriosas” que tampoco lograron atraer a la opinión. Finalmente se llegaba a una tercera forma de “socialismo radical” elaborada por el diputado Veyga quien, luego de votar por el artículo 11 de la jubilación ferroviaria, presentó una ley de jubilaciones para empresas privadas que prestaran servicios públicos. El artículo planteaba que la supuesta buena acogida del proyecto por parte de los trabajadores era otra invención radical afirmando sería incomprensible que los trabajadores pudieran impulsar un proyecto que eximía a las empresas de todo desembolso cargando los costos sobre ellos mismos y el público. La conclusión era lapidaria:

“Sospechamos que todos los ‘socialismos’ que intenten llevar a la práctica los diputados radicales fracasarán fatalmente, porque son simples maniobras de mistificación y baja politiquería. El pueblo trabajador no es, por cierto elemento dócil y utilizable para semejante acción regeneradora.” (LV, 22-8-15)

Dos elementos merecen ser subrayados. Por un lado el optimismo socialista acerca de la autonomía de los trabajadores, por otro, la fuerte intransigencia que parecía cerrar la puerta no sólo para el dudoso proyecto de jubilaciones propuesto por los radicales, sino para futuros acuerdos en pos de reformas que mejoraran la suerte de los trabajadores.

De todos modos este acercamiento tampoco era deseado por los radicales. El 14 de septiembre La Vanguardia se hacía eco de las declaraciones del candidato radical a la gobernación de

Córdoba quien había sostenido que “el partido radical es conservador” agregando que “ningún partido, como el nuestro, ha combatido y combate, de un modo más activo y eficiente, el socialismo”.³ El Editorial de La Vanguardia se mostraba satisfecho con que los radicales se definieran abandonando “la hipocresía con que se finge protector y amigo del pueblo trabajador”. El hecho de que no podían defenderse a la vez los intereses de la clase rica y los del proletariado, señalaba el diario socialista, explicaba que los radicales no encontrarán otro remedio para la carestía que “el recomendar al pueblo el consumo de alimentos inferiores”, explicaba asimismo que sólo pudieran pensar en un proyecto de jubilación que eximiera de toda contribución a las empresas y que privara a los trabajadores del derecho de huelga. El Editorial concluía planteando que el discurso del radical cordobés era “una promesa de que el radicalismo, para mantenerse en el poder, intensificará el espíritu reaccionario que hoy acusa tan nítidamente para conquistarlo”. (LV, 14-9-15).

En esos días el enfrentamiento con los radicales alcanzaría una institución clave para los socialistas: la cooperativa el Hogar Obrero. El 11 de septiembre un Editorial de La Vanguardia deploraba el ataque que el diputado radical Le Bretón había lanzado sobre la cooperativa y lo explicaba por el hecho de que siendo incapaces de trabajar positivamente por el bienestar del pueblo los radicales concentraban sus energías en denigrar la obra de los demás. Pero el Editorial intentaba ir más hondo en la comprensión del ataque radical, explicándolo por el hecho de que los miembros de esa fuerza, incapaces de comprender nada que excediera el “inmediato provecho electoral”, no podían ver con buenos ojos a instituciones que hacían ver a sus miembros que las ventajas obtenidas no debían agradecérselas a un tercero sino que eran “el resultado de su propia capacidad, de su propia acción”.⁴ En la mirada socialista el clientelismo radical no se diferenciaría en nada del que practicaban “los bandos del llamado antiguo régimen: estos degradaban al pueblo con la venta del voto; los radicales lo corrompen con pequeños favores, con medidas de ‘beneficencia’ barata”. El artículo concluía planteando que la escasa capacidad para la acción extraparlamentaria, que se expresa en su “ojeriza contra las cooperativas” era la misma que mostraban en la acción parlamentaria cuando proponían el pan

³ La animadversión a los socialistas basada en tópicos conservadores alcanzaba al propio Yrigoyen quien planteaba “¿Cómo puede aceptarse ni el programa máximo ni el programa mínimo y mantener incólume el principio de la propiedad privada o pública? La doctrina socialista implica esencialmente el desconocimiento de una o muchas facultades inherentes en la propiedad...cada una de las reivindicaciones que ese partido suscribe en sus programas es una amenaza a los fundamentos mismos de la propiedad.” (citado en Rock, 1992: 132)

⁴ La acusación de electoralismo se hacía más explícita al comentar un acto que en el barrio de Boedo habría organizado la “Federación Obrera Radical Alberdi”. La Vanguardia plantea- haciendo referencia al nombre que Rock (1992: 136-137) atribuye a una “argucia” radical para intentar confundirse con la FORA- que nunca habían sospechado “la existencia de sociedades gremiales adheridas al radicalismo y que se inspiraran, al mismo tiempo, en Alberdi.” La ironía continúa al preguntarse acerca de qué trataría la conferencia “¿Sobre el pan bazo? ¿Sobre la prohibición del derecho de huelga? ¿sobre la inutilidad de la cooperación libre?” (LV, 24-9-15)

bazo y “leyes pseudoobreras que maniatan a los trabajadores y los entregan a la voracidad de las empresas” (LV, 11-9-15)

Un mes más tarde La Vanguardia explicaba que la campaña radical contra “El Hogar Obrero” obedecía a un cambio de táctica de las fuerzas conservadoras, entre las que ubicaba al radicalismo, frente al socialismo. El socialismo que antes era visto como una cuestión patológica o un peligro para el orden público se tornaba objeto de interés y aún los más caracterizados reaccionarios pretendían demostrar “su ‘socialismo’” y aún enseñarlo a los socialistas. Considerando el privilegio como “una fatalidad irremediable”, los “politicastros burgueses” ofrecían una legislación social basada en la filantropía burguesa y creaban “ollas populares” u ofrecían refugio a los trabajadores en el Hotel de Inmigrantes. El “socialismo” de estos políticos, continúa enumerando el artículo, se manifestaba también “en las falsas leyes de protección al obrero, como la promesa de ley de jubilación ferroviaria con su artículo 11 contra el derecho de huelga...en ‘federaciones obreras’ radicales o en “centros obreros” figueroístas y católicos, que son simples agencias de crumiros”. La Vanguardia planteaba en ese momento se hace particularmente necesario insistir sobre la campaña de difamación que contra la cooperación llevan adelante los radicales “la facción que más se distingue en la política de confusionismos y mistificación” – esta necesidad de insistir parece mostrar que las “mistificaciones” radicales no dejaban de tener oídos entre los trabajadores-. (LV, 12-10-15)

Unos días antes un Editorial de La Vanguardia trazaba un cuadro general del radicalismo y su política social. Comenzaba señalando que en veinticinco años -tiempo que había bastado para revolucionar Japón, transformar la agricultura argentina e incorporar a millones de inmigrantes- el radicalismo no había dado un paso hacia nuevas ideas y costumbres políticas. “Desgajada del viejo tronco oligárquico...la facción nunca tuvo otra razón de ser que los antagonismos personales”. El odio a Roca y a Mitre era su único móvil y consigna y así había seguido denunciando los vicios de los que gobernaban sin por ello dejar de acoger en sus filas “a buenas piezas del oprobioso y derrumbado juarizmo.” A medida que la revuelta se había hecho más difícil se habían concentrado en la difamación, un procedimiento eficaz cuando frente a sí tenían otras facciones similares pero, planteaba el Editorial con optimismo y algo de soberbia, que dejaba de serlo una vez que “el pueblo auténtico” entraba en escena. Señalaba que si al ser derrotados por primera vez hablaron de una “conjuración siniestra” entre los socialistas y los clericales capitaneados por Indalecio Gómez, luego de cuatro años de vida parlamentaria en los que son testigos inertes de la acción socialista “vienen a vociferar contra la institución económica más popular del país”, el Hogar Obrero. (LV, 7-10-15)

En el tramo final de la campaña electoral la ambigüedad radical respecto de la cuestión obrera no dejaba de suscitar dificultades a los socialistas que acentuarían su discurso desmitificador. Uno de los tópicos era la denuncia de que los radicales elogiaban para otros países prácticas que no aceptaban para la Argentina.⁵ Otro era el cuestionamiento de los contactos de los radicales con sectores obreros. Se denunciaba el “pacto no secreto” que los radicales habrían establecido con los “socialistas amarillos” seguidores de Palacios (LV, 2-3-16), así como la complicidad que existía con los anarquistas, subrayando que figuras como “el profesor ácrata Julio Barcos” pretendían “vincular las organizaciones obreras al partido cuyos diputados votaron el famoso artículo 11 contra las huelgas”. Se destacaba asimismo que la posición encumbrada en el gobierno santafecino del doctor Caballero, ex anarquista, se plasmaba en una cercanía en “tocamientos entre la facción de los regeneradores y los anarquistas”, subrayándose también como en varias huelgas lideradas por los anarquistas los politicastros radicales terminaban utilizando a los trabajadores para sus propios fines (LV, 2-3-16).

A comienzos de marzo La Vanguardia publicaba, en el centro de la primera página y con gran destaque, un largo documento que luego de explicar lo que los socialistas entendían por “política criolla” – señalando que no implicaban un desprecio por la tradición de mayo a la vez que subrayando el papel progresivo que habían tenido en el país las ideas extranjeras- y analizando las fuerzas que tomaban parte en la elección presidencial. El juicio sobre el partido demócrata progresista era negativo –se decía que sólo tenía un programa para salvar las apariencias y que era “un vaciadero de las antiguas facciones oligárquicas”- pero consideraba que “la facción radical es nuestro más perverso y desleal enemigo”. A las acusaciones tradicionales –sus diputados votan el presupuesto de culto, los fondos para la aplicación de las leyes antisociales, los impuestos que gravan los consumos del pueblo y nuevas emisiones monetarias- se agregaban las posiciones acerca de la legislación social:

“desnaturalizan las leyes benéficas para el pueblo adulterándolas con enmiendas bochornosas como lo hiciera el diputado Melo con la ley de accidentes del trabajo,⁶ ...presentan proyectos

⁵ Así celebraban las reformas sociales, como la jornada de ocho horas, impulsadas por Batlle en Uruguay pero no se muestran dispuestos a aprobar leyes similares en la Argentina (23-2-16), o consideran que las cooperativas tienen importantes ventajas en Europa pero “son inadaptables a nuestro medio” (26-2-16).

⁶ En septiembre de 1915 los socialistas celebran uno de sus primeros “triumfos” en materia de legislación social: la aprobación por parte de la cámara de diputados de una ley indemnizando a quienes sufrieran accidentes laborales. (LV 26-9-15). Sin embargo, lamentaba La Vanguardia, el carácter progresivo de la ley, en particular la consagración del principio de “riesgo profesional”, había sido limitado por la incorporación de un artículo, propuesto por un diputado radical y secundado por los conservadores. exceptuando de indemnización a los obreros víctimas de accidentes que fueran imputables a sí mismos. (28-9-15) La Vanguardia señalaba que el trámite parlamentario de la ley de accidentes de trabajo probaba que se estaba produciendo lo que los socialistas venían pronosticando desde tiempo atrás: “la división de clases en el terreno político”. Tanto ese debate como la tarea de la cámara, explicaba el Editorial, mostraban que ella iba tomando el aspecto de un parlamento moderno en el que todos los intereses estaban representados “dentro de las dos grandes divisiones: la clase rica y burocrática y la de los trabajadores asalariados.” En defensa de los empresarios, especuladores y todos aquellos perjudicados por la ley

destinados a favorecer la mezquindad de las empresas capitalistas...(como) el proyecto sobre jubilación de los tranviarios....al tratarse la ley de jubilación de los ferroviarios, votaron el artículo 11 por el que se desconoce el legítimo derecho de huelga.” (LV, 4-3-16)

El Editorial subrayaba que “las calumnias dirigidas contra El Hogar Obrero” terminaban de probar que el radicalismo era “un pérfido enemigo del Partido Socialista”. Volviendo sobre el viejo tópico de las verdaderas denominaciones de las fuerzas políticas, el radicalismo era visto como tal sólo de nombre lo que habría sido reconocido por el gobernador electo de Córdoba Eufrasio Loza al afirmar que había afirmado “el radicalismo es el único partido conservador que existe en la república y el único que podrá detener los avances del socialismo.” La Vanguardia celebraba la sinceridad de Loza, aclarando que ya lo sabían por la acción de gobierno en Santa Fe y Entre Ríos y subrayando las funestas perspectivas que esto abriría para un gobierno del radicalismo en el plano nacional, pero cuestionaba su pronóstico al concluir hablando del futuro triunfo socialista.

Pero el triunfo sería radical. Aunque los socialistas no se hacían ilusiones acerca de sus chances en la primera elección presidencial de la que participaban; sí confiaban en la posibilidad de repetir sus últimos triunfos en las elecciones de la Capital Federal. Sin embargo en ese distrito fueron derrotados tanto en las elecciones de electores presidenciales como en las de diputados nacionales.

El primer movimiento: La huelga marítima

El 12 de octubre de 1916 Yrigoyen asumió la Presidencia de la Nación. Menos de dos meses más tarde debió enfrentar su primer gran conflicto obrero: los trabajadores de las empresas navieras de cabotaje se declararon en huelga y solicitaron que el gobierno permaneciera “neutral frente al conflicto” (LV 1-12-16).

En los primeros días del conflicto los socialistas manifestaron dudas acerca de que los radicales respondieran a ese pedido de neutralidad. El 4 de diciembre La Vanguardia señalaba la complicidad que el gobierno mantenía con los armadores proveyéndoles con “marinos profesionales y conscriptos que la ley militar no destina a rompeshuelgas” subrayando el doble discurso radical: por un lado se asegura la prescindencia y el deseo de “interceder en el conflicto como árbitro amistoso”, por otro, “en la realidad de las cosas” se pronuncia como “aliado de los armadores y les acuerda el apoyo más valioso en las circunstancias presentes”. El conflicto puntual permitía sacar una consecuencia más general: el radical sería “un gobierno

de accidentes de trabajo se unían los radicales Melo y Demarchi “con el conservador de viejo cuño y abogado de todos los capitalistas Padilla”. Enfrente, concluía el artículo casi celebrando la propia soledad, aparecían las fuerzas compactas y enérgicas del Partido Socialista. (LV; 29-9-15)

prácticamente hostil a la clase trabajadora” (LV, 4-12-16). Esta caracterización estaba específicamente dirigida por La Vanguardia a “la organización obrera” la que debía apercibirse “a la defensa de sus intereses contra el nuevo enemigo” de modo de no dejarse sorprender por maniobras desleales. El comentario dejaba ver tanto el rol paternal que los socialistas planteaban respecto a las organizaciones gremiales como el temor acerca de la buena relación que respecto al gobierno radical estaban estableciendo algunos dirigentes de esas asociaciones.

Prueba de esa buena relación sería la entrevista que el 5 de diciembre mantuvieron Yrigoyen y Francisco García, líder de la Federación Obrera Marítima (FOM) y Secretario General de la FORA sindicalista. El resultado de la reunión sería “la concesión de que no se recurriría a la policía portuaria para reclutar y proteger esquirols” (Rock, 1992: 143). Ese mismo día La Vanguardia reconocía que el gobierno se inclinaba por adoptar una política de “equidad”, lo que explicaba por la necesidad política de Yrigoyen de no aparecer “rendido” a los intereses del capital. Más allá del señalamiento del cálculo político el Editorial concluía saludando la nueva actitud del gobierno frente a los problemas obreros y haciendo votos por que dicha resolución se mantuviera (LV 5-12-16).

La ambivalencia reaparecía en un artículo que mostraba temor acerca de la posibilidad, anticipada por “fuentes oficiosas”, de que gobierno estuviera por cambiar su posición respecto a la huelga marítima. El juicio de los socialistas diferenciaba la forma en que los radicales se vinculaban con los “industriales” de las de administraciones anteriores: lo que se criticaba era que desde el gobierno y la prensa radical se prestara oídos a los propietarios que se presentaban como defensores del “interés nacional” y denunciaban los “desmanes de los huelguistas”. Se señalaba que los trabajadores reconocían, como lo hacía el mismo diario socialista, “que la policía se ha comportado, salvo casos aislados, con entera corrección” y que por eso los huelguistas han ajustado sus acciones a la propaganda y vigilancia. El artículo concluía instando al gobierno a mantener su ecuanimidad investigando los supuestos incidentes “antes de adoptar resoluciones que lo coloquen francamente como aliado de los armadores y como enemigo de los obreros.” (LV, 17-12-16)

La huelga naval continuaba con éxito. Finalmente los patrones debieron aceptar el arbitraje gubernamental que antes habían rechazado. Los socialistas, aunque cuestionaban la figura elegida para el papel, la del jefe de policía Moreno de quien dudan acerca de su imparcialidad, rescataron la adopción del “procedimiento moderno y eficaz por excelencia”. La conclusión era de una vigilante expectativa aguardando de Moreno que no defraudara los intereses de los trabajadores y demostrara que “algunos funcionarios pueden ser imparciales, por más cerca que se hallen de la clase sustentadora del poder público”. Finalmente, señala Rock (1992: 143), el

arbitraje sería favorable a los obreros que obtendrían las principales concesiones salariales reclamadas.

En esos días los socialistas se mostraban favorables a otras iniciativas del gobierno radical. El decreto presidencial fijando el cierre de los almacenes y despachos de vino los días domingo fue saludado por el diario socialista como “la disposición de carácter social más importante que se registra en los últimos tiempos” (LV, 25-12-16). La decisión de Yrigoyen de conmutar la pena capital al “descuartizador Ernst” fue “aplaudida sin reservas” y defendida ante las críticas de la prensa. (LV, 3-1-17). Estas medidas, junto a la posición del gobierno ante las huelgas, llevarían a un juicio general acerca de “las características del gobierno radical”. Este era, argumentaba un Editorial de La Vanguardia, “un gobierno de fuerza y de misericordia, en que la magnanimidad y el buen corazón de los altos funcionarios componentes hacen ‘pendant’ con su intolerancia y su fuerza.” Estas características, señalaba el diario socialista, explicaban la confusión del pueblo “obligado a fluctuar entre movimientos de admiración y alarmante perplejidad”. Rescataban que un gobierno y unos ministros que donaban “caritativamente” sus ingresos mostraba que están poseídos de sentimientos respetables, rescataba asimismo la sencillez de un presidente y unos ministros que vestían de simple saco, así como la “magnanimidad” del acto de evitar un fusilamiento. Estos cambios referidos a la forma- ya que en cuanto al fondo, se señalaba, los radicales no aportaban ninguna novedad- parecían conformar aún al “pueblo ingenuo” que sólo les plantea objeciones que también tienen que ver con las formas. Es el caso de las dudas que surgen cuando los proclamados “defensores de la constitución” apelaran a expedientes no contemplados en ella para cumplir sus “fines regeneradores”. El Editorial se apuraba en aclarar que los socialistas no comparten la indignación del “pueblo ingenuo” ya que ellos no creen en la bondad de las constituciones y leyes eternas. Sin embargo – en un planteo que anticipa las posteriores críticas institucionalistas del socialismo a las intervenciones provinciales y a las prácticas parlamentarias radicales- agregaba:

“preferiríamos a ver a los gobernantes radicales dispuestos valientemente, francamente a reformar lo que de reaccionario e inconveniente para los intereses del país hay en aquellas cartas orgánicas y disposiciones legales a comprobar que con subterfugios y arbitrariedades las viola o las desvirtúa. Porque esos procedimientos, si pueden resultar deseables en el caso del reo Ernst...podrían emplearse en ahogar verdaderos derechos democráticos, verdaderos derechos humanos...” (LV, 5-1-17)

La incomodidad ante un gobierno que en ocasiones y arbitrariamente cumplía parcialmente con las aspiraciones obreras mientras en otras la contrariaba se manifiesta en la conclusión del Editorial que, retomando implícitamente las viejas profecías de simplificación política y sobre el papel educador de la experiencia, auguraba un cercano desenmascaramiento que pondrá fin al “misterio del gobierno radical”.

La huelga municipal

Esa clarificación los socialistas creerían encontrarla en la actitud con que el gobierno enfrentaría la huelga que, a partir de mediados de marzo, declararon los obreros municipales quienes solicitaban el pago puntual de los salarios, la adjudicación de ascensos por antigüedad y la eliminación de la obligación de reponer los bienes que dañaran; demandas que, señalaba la declaración de huelga reproducida por La Vanguardia, habían sido aceptados por la anterior administración pero no por el nuevo gobierno radical. El documento ponía particular énfasis en particular en lo que hacía al tema de los nombramientos, denunciando despidos a los militantes gremiales y planteando una velada acusación de un uso clientelar y discrecional de los cargos. (LV, 16-3-17)

Al día siguiente el tema ya merecía un Editorial por parte de La Vanguardia. En él se deploraba que el Intendente que inicialmente había parecido animado de buenos propósitos al dictar medidas como la jornada de ocho horas, hubiera finalmente cedido a los malos consejos o a los “prejuicios de partido o de ‘comité’” y provocado la legítima resistencia de los empleados. Particularmente crítico era con el rechazo que el Intendente Municipal planteaba respecto a la existencia misma de la asociación que reunía a los trabajadores, considerando un contrasentido que el Intendente designado por un gobierno que aconsejaba la conciliación entre obreros y patrones y se prestaba a ser su instrumento, como en el caso de los marineros, desechara toda posibilidad de entenderse con el personal obrero que de él dependía. Esta incongruencia era explicada por el diario socialista como el resultado de considerar a la organización de los empleados municipales como un movimiento manejado con fines políticos por los socialistas.⁷

Tal argumento era agitado por la prensa radical que sostenía:

“Es el socialismo, en efecto, el encargado de mantener en auge constante los fermentos agitadores que pululan en la masa general de los obreros municipales; masa que, como ha visto bien el socialismo, constituye un elemento fácilmente maleable y extremadamente dócil a las sugerencias de aquel.” (citado en Rock, 1992: 144).

Los radicales devolvían la pelota. A las tradicionales invectivas socialistas respecto a los seguidores del radicalismo contestaban con una no menos negativa e iluminista caracterización de los trabajadores que seguían a los socialistas. Dos días más tarde La Vanguardia resaltaba la actitud “resuelta y solidaria” de los trabajadores y rechazaba que dicha adhesión se basara en la “inconsciencia”. La identificación entre huelguistas y partido era nuevamente borrada, al tiempo

⁷La Vanguardia calificaba tal interpretación como “una burda invención” y planteaba que la huelga se fundaba en reclamos tan básicos como el pago en fecha o la estabilidad laboral cuestionada por un gobierno que trataba el nombramiento de un simple peón como si fuera el de un “cargo de confianza” y lo hacía depender del presidente de la república. (LV17-3-17)

que se resaltaba la radical al denunciar que en el conflicto se enfrentaban la administración comunal apoyada por todo el partido radical -cuyos clubes “repletos de famélicos aspirantes a puestos públicos” se habían convertido “en agencias reclutadoras de crumiros”- y los obreros municipales. Finalmente, las cosas quedaban claras gracias a una huelga que tenía “la virtud de poner al desnudo al radicalismo y a los funcionarios que emanan de sus filas.” (LV, 18-3-17)

Dos días más tarde el Comité Ejecutivo del Partido Socialista emitía una declaración en la que sostiene que la huelga no obedecía a una directiva del Partido⁸ sino que había sido “provocada intencionalmente” por las autoridades comunales que se habrían negado a tratar con la asociación gremial que representa a los trabajadores. El texto terminaba explicando la conducta del gobierno comunal por la existencia de “bajas motivaciones electorales”⁹, a la vez que ligando la cuestión con un viejo reclamo socialista: “la pronta entrega del gobierno de la comuna al pueblo de la capital.”¹⁰ (LV, 21-3-17)

El conflicto se tensaba. El diario radical La Época advertía que la agitación combinada de huelguistas y “políticos sectarios” podía producir “lógicas reacciones que renovarían “jornadas obreras de triste agitación”. La Vanguardia hacía más explícita la amenaza del diario radical denunciando que lo que esperaba del gobierno era: “el estado de sitio, las prisiones en masa, precedidos acaso de alguna masacre de huelguistas, y coronados con asaltos de locales obreros e incendios de bibliotecas.” Pero La Vanguardia no abandonaba su ambivalencia y aún no identificaba del todo estos planteos con el gobierno sino que instaba a éste a desoír las voces de “los elementos de la clase rica”. Señalaba a los radicales que quienes más se favorecerían con su ataque a los trabajadores serían los conservadores ya que con ello “el gobierno radical aparecería colocado, a igual altura, ni más ni menos, que los gobiernos de viejo cuño oligárquico.” (LV, 24-3-17)

Finalmente el 28 de marzo, y aunque los municipales no formaban parte de la Federación, la FORA sindicalista (Marotta, 1961: 201)- amenazaría con declararar la huelga general. Yrigoyen, con un nuevo conflicto marítimo en ciernes, y privilegiando su relación con la

⁸ Al respecto reafirmaba la tradicional posición de “neutralidad” planteada por los socialistas expresando que “como organismo político no ha intervenido en movimientos que, como el actual, son de exclusivo carácter gremial, aunque, aclara, los mira con simpatía.

⁹ El día 21 un Editorial hacía más explícitas cuales eran esas motivaciones electorales al denunciar que “el plan regenerador” del radicalismo consistía en “ir substituyendo al personal de la administración, en el orden nacional y comunal, por los elementos que esperan desde el 2 de abril por la ubicación prometida”. El reclamo justificado de los obreros les dio la ocasión de lograr un doble fin “matar la organización obrera” y servir a los intereses partidarios al nombrar en reemplazo de los huelguistas al “desecho del radicalismo” gente “de lista en los comités” que ahora se ocupa de las tareas de limpieza. (21-3-17)

¹⁰ A pesar de la existencia de proyectos radicales que proponían la elección popular tanto del ejecutivo como el legislativo comunal Yrigoyen se había limitado a nombrar un nuevo intendente Joaquín Llambías y a reemplazar el Consejo designado en base a un criterio notabiliar por otro formado por dirigentes de los comités barriales radicales.

conducción sindicalista de la FORA (Rock, 1992: 146) presionaría a Llambías para que reincorporara a los huelguistas despedidos.¹¹ El 2 de abril La Vanguardia informaba que el conflicto había tenido una “solución decorosa” merced a una nueva propuesta del Intendente Llambías. Se señalaba que, aunque algunas de las causas del conflicto subsistían, las conversaciones que el gobierno municipal había entablado con la FORA dejaban ver que había fracasado el móvil principal de su acción “destruir la organización gremial” (2-4-17)

Más exitoso sería el resultado que, con cierto aval del gobierno radical, obtendrían los “marineros” de la FOM de nuevo en conflicto, los que lograrían, en parte gracias al trato favorable de Yrigoyen, imponer sus reivindicaciones.¹² Podemos concluir que en los primeros meses de gobierno radical las organizaciones gremiales obtuvieron algunos triunfos y que la posición socialista frente al gobierno era ambivalente: aunque no ahorran críticas no dejaban de reconocer ciertos avances como la aprobación por parte de la “cámara” del proyecto de ley que prohibía el pago de salarios con “vales o bonos” (LV, 20-5-17). De todos modos a partir de mediados de abril el foco de la atención socialista ya no estaría puesto en el movimiento obrero sino en la cuestión internacional que amenazaba con dividir las filas partidarias.

La gran huelga ferroviaria

Al tiempo que el debate interno comenzaba a resolverse a favor de la dirección partidaria, las páginas de La Vanguardia seguían con relativo interés la contrastante actitud del gobierno nacional en los conflictos que agitaban a los trabajadores del Ferrocarril Central Argentino¹³ y a

¹¹ La Vanguardia deslindaba responsabilidades respecto al conflicto -cuya principal consecuencia, la falta de recolección de residuos, provocaba descontento general- planteando que la principal correspondía al Intendente por su empecinamiento en no reconocer a la sociedad de obreros municipales. Señalaban que ese empecinamiento llegó al punto de no cumplir con el acuerdo que habían establecido la FORA, que se había solidarizado con los huelguistas, e Yrigoyen. Llambías al resistir las órdenes presidenciales negándose a tratar con la asociación obrera y reincorporar a los huelguistas, se había convertido en “el único responsable” de la huelga general. Podemos ver que el diario socialista separaba en este caso a Yrigoyen de su “delegado” planteando que aún estaba a tiempo de evitar “los perjuicios de una huelga general” con el simple expediente de ordenar expresamente “la readmisión de todos los huelguistas”. (LV, 30-3-17)

¹² El conflicto se había iniciado a fines de marzo frente a la decisión de la empresa Mihanovich de contratar personal no perteneciente a la FOM sino a una “sociedad amarilla” (Marotta, 207). Esta organización declara la huelga a la empresa y las fuerzas armadas ocupan el puerto. La FORA amenaza con una huelga general y sus dirigentes se entrevistan con Yrigoyen. Finalmente los huelguistas obtienen el éxito y firman un convenio que estipula que la FOM seleccionará el personal de los buques (Godio, 2000: 247).

¹³ A mediados de junio una huelga iniciada en los talleres de Rosario de la empresa Central Argentino generó algunos despidos esto derivó en que el conflicto se extendiera y radicalizara, respondiendo con sabotajes y actos de violencia a los intentos de mantener los trenes en funcionamiento. El 11 de agosto los trabajadores extienden el paro a todo el Ferrocarril Central Argentino. Días antes la Federación Obrera Ferroviaria y la FORA habían hecho público un documento cuestionando, con argumentos nacionalistas, el accionar de las empresas ferroviarias (Rock; 1992: 152-153) y amenazando con llamar a un paro general. Esto hizo que el gobierno desistiera de enviar tropas a Rosario y estableciera, a través del Ministro de Obras Públicas Pablo Torello, contacto con los huelguistas, garantizando la reincorporación de los obreros despedidos. La solución adoptada mereció los reparos de la prensa y los círculos británicos que cuestionaron que el gobierno amparara a los “violentos” y humillara a las empresas

los de la usina de la Compañía Argentina de Electricidad.¹⁴ Pero sería el gran conflicto ferroviario que, a partir de mediados de septiembre, paralizaría al país durante semanas el que devolvería el centro de atención de los socialistas al mundo obrero.

El conflicto se había iniciado en el Ferrocarril Central Córdoba pero había derivado en los preparativos de huelga en todos los ferrocarriles. Las empresas y buena parte de la prensa responderían al mismo planteando la sospecha de que detrás del conflicto se encontraban “influencias ajenas a los gremios”, particularmente de intereses germanos interesados en dañar a las empresas británicas.¹⁵ La campaña de las compañías ferroviarias tendría cierto éxito y el gobierno para aventar las acusaciones de pro-germanismo abandonaría la actitud “prescindente” de conflictos anteriores y enviaría tropas a custodiar trenes y talleres. En Rosario se produjeron choques entre los huelguistas y fuerzas militares, los que dejaron heridos y centenares de obreros presos. Pero aún esas medidas represivas, señalaba La Vanguardia, parecían escasas a las “clases conservadoras” que encabezadas por la Bolsa de Rosario pedían el Estado de Sitio que el gobernador radical parecía dispuesto a establecer (LV, 22-9-17)

ferroviarias (Rock, 153-154). La Vanguardia desestimó estos planteos cuestionando con particular dureza al diario La Nación que juzgaba como “un síntoma precursor de las peores calamidades” lo que no era más que un tardío acto de justicia de un gobierno que abandonaba por una vez las peores tradiciones políticas y la teoría del “amparo al capital ferroviario.” Agregaba La Vanguardia que lo que La Nación veía como un presagio de siniestras consecuencias era para los socialistas simplemente “el acto naturalísimo de un gobierno prescindente de hecho, en el sentido exacto de la palabra, en los conflictos entre el capital y el trabajo.” Este reconocimiento al gobierno era de todos modos limitado por el comentario final que advertía sobre el peligro “fundado” de que el gobierno se dejara influenciar por dicha prédica “con lo que habría borrado el único título –a lo menos hasta el presente- que puede invocar para diferenciarse de los funestos gobernantes que han sido el azote de la nación por el espacio de medio siglo.” (LV, 27-8-17)

¹⁴ La respuesta del gobierno radical –haciéndola funcionar con los ingenieros de la Municipalidad y los foguistas de la Armada- llevaría a La Vanguardia a historiar la actitud del radicalismo frente al movimiento obrero y a subrayar la ambigüedad de sus posiciones en el presente: contrastando su política “de venganza y de odio” frente a la huelga municipal con la que habían adoptado ante las huelgas marítimas y ferroviarias. Esa duplicidad era explicada por La Vanguardia por el diferente peso de los obreros municipales y los empleados de la compañía de electricidad “enemigos poco temibles por su número o por la falta de solidez de su organización”. (LV, 5-9-17) Días más tarde esa duplicidad recibía otra explicación al señalarse que el nuevo conflicto hace patente “la incoherencia de este gobierno, su falta de sinceridad o las influencias contrarias que los dominan según sean los ministros que deban intervenir”. Para subrayar esa disparidad de criterios entre los funcionarios radicales se señalaba que mientras el Ministro de Obras Públicas había conminado a las empresas a reanudar el tráfico interrumpido por la huelga y nunca pensó en prestarles los maquinistas de la armada o de los ferrocarriles del Estado, el Intendente Municipal y el Ministro de Marina han hecho lo contrario sin que los derechos de los obreros de las usinas fueran menos legítimos ni los intereses de las empresas más sagrados. (LV, 7-9-17)

¹⁵ La Vanguardia, más allá de las simpatías rupturistas de quienes la dirigían, rechazó el argumento que buscaba “despertar un poco de simpatía hacia las ‘pobres’ empresas, que hasta ahora no han sido muy gratas al público.” Planteaba que aunque desconocían cuales eran los sentimientos del gobierno frente al capital inglés los trabajadores no tenían motivos para hacer tales distinciones ya que la miseria no era más o menos simpática o llevadera de acuerdo al pabellón que la cubriera. (LV, 19-9-17) Dos días más tarde La Vanguardia planteaba una velada amenaza al afirmar que “la intransigencia de los capitalistas ingleses ante las justas reclamaciones obreras está comprometiéndolo entre el numeroso gremio ferroviario, y en el pueblo argentino en general, un sentimiento que conviene a los intereses mismos de aquellos y del país que representan no dejarlo apagarse.” (LV, 21-9-17). Podemos ver que, a pesar de la posición rupturista de quienes lo dirigían, el diario socialista no se sumaba al discurso de quienes, en los días en que se hacía público el telegrama Luxburg, ligaban la lucha de los ferroviarios con la cuestión internacional.

Los socialistas no dejaban de subrayar la duplicidad de los radicales que al tiempo que defendían los intereses capitalistas deseaban aparecer favoreciendo la causa de los trabajadores. Una prueba de ello, señalaba La Vanguardia el 26 de septiembre era que al iniciarse la huelga ferroviaria había nombrado una comisión – integrada por Carlos Melo, Rogelio Araya y Pío Ziblin- para estudiar el conflicto. El diario socialista recuerda los antecedentes de Araya -quien al tratarse la jubilación de los ferroviarios, había dado un largo discurso sosteniendo que estos trabajadores no tenían el derecho de declararse en huelga-y agrega que similar posición había sostenido Melo el día anterior al presentar un proyecto declarando ilegal “toda reunión aún cuando sea de dos personas que tenga por objeto fomentar, organizar, dirigir o facilitar la continuación de una huelga o un lock-out” en los ferrocarriles. La Vanguardia señalaba que el ilusorio proyecto, que afirmaba bastaría una ley para evitar las huelgas, tenía la virtud de clarificar las cosas poniendo de manifiesto “las lamentables y reaccionarias ideas de los hombres del partido radical, respecto a los derechos de los trabajadores.” (LV, 26-9-17)¹⁶

El conflicto iba escalando. El 24 de septiembre el Consejo Federal de la FOF había llamado a la huelga general ferroviaria, a la que se había sumado “La Fraternidad”. Como señala Marotta (1961: 208) era la primera vez que en un conflicto tomaban parte todas las especialidades. No sólo se paralizaron los ferrocarriles sino que la “Unión de chauffeurs” declaró una huelga en solidaridad. El 30 de septiembre un plenario de delegados autorizó al Consejo Federal de la FORA para declarar, cuando considerara oportuno, la huelga general en apoyo a los ferroviarios. Por su parte las organizaciones empresarias presididas por Joaquín de Anchorena, presidente de la Sociedad Rural, amenazaban con lanzar un lock-out y se reunían con Yrigoyen para pedirle una acción más decidida frente a los ferroviarios.

El gobierno se encontraba entre dos fuegos. Sin embargo en esta ocasión La Vanguardia juzgaba que la inacción gubernamental no obedecía a sus ambigüedades sino a procedimientos dilatorios que buscaban encubrir “detrás de las simpatías por los obreros, de que a veces hace gala, una política de culpable tolerancia hacia las empresas.” La indecisión era, se explicaba, “un medio encaminado a vencer por cansancio a los obreros”. El diario socialista subrayaba que si el gobierno quisiera podría normalizar el servicio como había hecho en el Central Argentino, explicando que si no se inspiraba en esos antecedentes era porque estaba arrepentido de su propia obra y quería volver sobre sus pasos. (LV, 4-10-11) Tres días más tarde el diario socialista volvía a plantear que el conflicto ferroviario ponía de manifiesto “la indecisión y la

¹⁶ Pero si los socialistas cuestionan al gobierno radical no dejaban de señalar que las posiciones más favorables a las empresas y contrarias a los huelguistas era las que sostenía buena parte de la prensa, que pedía una acción más decidida, y las del Senado, en el que los radicales eran minoría. 27-9-27

falsía de los gobernantes radicales en toda su actuación, siempre que las circunstancias los colocan frente a intereses encontrados”. Subrayaba que mientras Yrigoyen manifestaba “su repugnancia por el empleo de los medios violentos contra el movimiento obrero” fuerzas del ejército fusilaban a mansalva a huelguistas de ferrocarriles del Estado. Esto llevaría al diario socialista a juzgar que “los sentimientos de benevolencia y ecuanimidad de que se jacta el presidente, o no son muy firmes, o varían según las condiciones de lugar y tiempo.” La misma doblez se señalaba en el Ministro de Obras Públicas que primero anunciaba la intención de implantar por decreto la reglamentación del trabajo ferroviario pero luego volvía sobre sus pasos y no sólo abandonó el proyecto sino que ofreció a las empresas ferroviarias personal del Estado para asegurar el servicio. El Editorial concluía con una pregunta:

“El gobierno, que no sabe exigir a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones para con el país ¿trata de ayudarlas indirectamente a derrotar a los millares de obreros huelguistas?”(LV, 7-10-17)

En los primeros días de octubre la FOM se declaraba en huelga en solidaridad con los ferroviarios. El gobierno endurecía su posición y dictaba un decreto reglamentando el trabajo ferroviario, el que no contemplaba la jornada de ocho horas ni otros reclamos obreros. La FOF rechazó el decreto y el gobierno respondió anunciando que haría circular los trenes con gente armada ante lo que La Vanguardia señalaba los riesgos que implicaría el restablecimiento del servicio cuando existían vías levantadas y no había servicio de señales (LV, 9-10-17) El 13 de octubre el gobierno dictó un decreto compulsivo dando 48 horas para retomar el trabajo sobre la base del reglamento de trabajo rechazado por los obreros. La FOF rechazó el decreto y se reunió con la FORA cuyo consejo general resolvió que si el gobierno se empeñaba en dar efectividad al decreto, se pondría en práctica de inmediato la huelga general (Marotta, 1961: 211).

La situación era tensa. Ese mismo día, la dura represión de la Armada en Talleres (Remedios de Escalada), produjo dos muertos y una decena de heridos. La Vanguardia señalaba que el hecho sangriento desenmascaraba “total y definitivamente la hipócrita conducta del poder ejecutivo nacional” durante el conflicto ferroviario. Explicaba que la calificaba de “hipócrita” porque mientras trataba de demostrar a los trabajadores en huelga y a la opinión pública la más absoluta imparcialidad” por otro lado prestaba “solapadamente” a las empresas el servicio de las fuerzas de la armada y el ejército nacional. Este gobierno, se continuaba explicando, no era menos reaccionario que los otros, anteriores, para él también era “más sagrado el beneficio del capital ferroviario, la propiedad de las empresas, que el bienestar y la vida de los 120.000 empleados del riel”. El diario socialista subrayaba la responsabilidad presidencial en un crimen que había sucedido “por orden superior” y señalaba que el gobierno que no podía engendrar sino “violencia de abajo”. La hoja socialista abandonaba incluso su tradicional tono moderado y su

rechazo a las prácticas violentas juzgando que “contra el uso criminal de las fuerzas armadas de la nación, puestas al servicio del capital ferroviario, la violencia es necesaria”. El gobierno de Yrigoyen, se planteaba, había organizado “fría y calculadamente, el sistema de represión por la masacre” y no era pensable que frente a él los obreros “continuaran dejándose matar como gorriones.”¹⁵⁻¹⁰⁻¹⁷ Al día siguiente La Vanguardia volvía a su tónica tradicional al señalar que los obreros no necesitan la violencia y aconsejar a los trabajadores a no caer en “la celada que les tiende un capitalismo sórdido y un gobierno hipócrita e inepto”, quienes habían preparado fríamente la “masacre de los Talleres”, provocando a los obreros para, ante la reacción de estos poder “ahogar en sangre” la huelga. (LV, 16-10-17).

Sin embargo Yrigoyen no permanecería inactivo. Ante la escalada del conflicto decidió dejar sin efecto el decreto compulsivo del día 13 y proponer un nuevo reglamento de trabajo. Estas decisiones fueron bien acogidas por los trabajadores que el día 18 levantaron la huelga.

Al concluir el conflicto La Vanguardia señalaba que el principal aprendizaje que dejaba el mismo era- junto al “triumfo de la organización” del que deben tomar ejemplo los millares de trabajadores desorganizados (17-10-17)- la definitiva comprobación “la incapacidad del gobierno para toda acción inteligente y sana”. Adoptando ciertos tópicos institucionalistas señalaba que Yrigoyen no había hecho uso de su influencia para lograr que el senado aprobara la reglamentación del trabajo que pretendían los ferroviarios sino que había preferido “reservarse para si sólo la gloria de solucionar el conflicto por sus propios medios, con su sabiduría y su influencia”, con lo que no había llevado más que a agudizarlo. Agregaba que, luego de haber anunciado infinidad de veces el final del conflicto, el gobierno parecía “regocijarse ante el país, y proclamar como un triunfo de la sabiduría presidencial la feliz circunstancia de que la paralización de los ferrocarriles no durara otro mes.” Pero había más, afirmaban indignados los socialistas: la prensa radical informaba que Yrigoyen había recibido manifestaciones “de consideración y respeto” de la delegación obrera que le había anunciado la decisión gremial de volver al trabajo. Comenzaba a aparecer lo que sería un fantasma para los socialistas y un tópico frecuente de su crítica: la relación entre Yrigoyen y los líderes sindicalistas. Por ahora la respuesta era descreer de la posibilidad de tal simpatía y concluir que al divulgación de la misma por parte del gobierno habría tenido como fin “advertir a los obreros ferroviarios que deben agradecerle la parsimonia con que ha procedido en la masacre de huelguistas por las fuerzas del

ejército, y el fracaso de las tentativas de aborto de la huelga por medio del crumiraje del estado.”(LV, 18-10-17)¹⁷

Huelga en los frigoríficos

A fines de noviembre un nuevo conflicto obrero vuelve a ocupar el centro de atención: ante una huelga de los trabajadores de los frigoríficos el gobierno responde con el envío de infantes de marina, lo que produce duras represiones en Zárate y Berisso. Los socialistas denuncian la ambigüedad radical como doblez y recuerdan que en la huelga ferroviaria el gobierno oficiaba de amigo de los huelguistas en Capital y los fusilaba en el interior. Recuerdan también que mientras mostraba una “conducta ejemplar” ante la “gran huelga marítima” se apelaba a los medios más “rastreros” para sofocar la de obreros municipales. La Vanguardia concluye que la ambigüedad radical no parecía resolverse en una línea esperanzadora sino amenazante al señalar que los hechos eran apenas “un indicio, poco tranquilizador, por cierto, de lo que podemos esperar del actual gobierno en materia de política obrera.” (LV, 30-11-17)

Días más tarde ante una nueva masacre en Avellaneda las palabras de La Vanguardia eran más duras. Señalaba que luego de un período de “tranquilidad”, bajo el gobierno radical “como en los peores tiempos del régimen” el desarrollo del movimiento obrero se producía entre “charcos de sangre”. Nuevamente se buscaba explicar el abandono de la ambigüedad radical: el odio de clase se había impuesto “a la simulación populachera a que se entregan a veces las autoridades y los corifeos radicales”. Los socialistas cargaban las tintas sobre el Interventor de la Provincia de Buenos Aires, quien buscaba el triunfo electoral en la provincia y necesitaba “la confianza de los capitalistas y las empresas ricas más influyentes”. El diario socialista señalaba continuidades y diferencias entre la política represiva del régimen y la radical:

“Bajo los gobiernos oligárquicos surgidos del voto venal, las masacres obreras eran actos de inútil barbarie. Hoy, consumadas por la inspiración o con la complicidad de gobernantes elegidos por el sufragio popular, podemos denunciarlas como una traición y un crimen infames!”. Y concluía: “!Caiga sobre este gobierno inepto e hipócrita la sangre de los trabajadores caídos en la lucha por mejorar su suerte y la de sus hijos!” (LV, 5-12-17)

¹⁷ Dos días más tarde La Vanguardia volvía sobre el tema de la huelga para sacar conclusiones doctrinarias y sostener que el sufragio universal sólo sería una realidad “cuando sirva para expresar en forma clara y concreta las aspiraciones de la masa popular, consciente de sus verdaderos intereses” Esta acentuación del tradicional elitismo pedagógico socialista hacía posible enjuiciar al gobierno de Yrigoyen señalando que la huelga había tenido como virtud poner de relieve “la simulación democrática” de un gobierno que al “despojo material” de sus antecesores del “régimen” había agregado “el cercenamiento de los derechos más elementales del pueblo en el orden político”. El Editorial concluía instando a tomar en cuenta las dos caras del poder a que se enfrentaban:

“Estamos ante la plutocracia, que explota y esclaviza pero no olvidamos en ningún momento a la oligarquía que completa, con el poder político, la obra de dominación y de despojo del pueblo laborioso y sufrido” (LV, 20-10-17)

Días después la comparación era aún más negativa para el gobierno. Se señalaba que si nada tenía de nuevo en la carencia de escrúpulos en perseguir sus objetivos, lo que se manifestaba en las intervenciones a las provincias, ni en la comprensión de los problemas que afectaban a la economía del país, en cambio debía reconocérsele “el triste privilegio del empleo de la violencia en los conflictos obreros.” Pero a la condena seguía el intento de comprensión de la oscilante política de un gobierno que de la valorable resistencia a las presiones en el caso de los ferroviarios pasa a la violencia desbordante ante la huelga de los frigoríficos. El diario socialista ensayaba una explicación basada en el cálculo electoral –la que sería retomada años más tarde por Rock (1992: 163-164):

“¿será que los ferroviarios forman un capital electoral que no puede desdeñarse, cuando todo se lo subordina a la necesidad del triunfo en la próxima campaña, lo que no sucede con los obreros de los frigoríficos, extranjeros en su gran mayoría?”(LV, 10-12-17)

El Partido Socialista respondía a los sucesos organizando un mitin de protesta. En el texto que acompañaba la convocatoria La Vanguardia señalaba que el gobierno ni siquiera justificaba el envío de fuerzas militares con la excusa de mantener el orden sino que directamente ponía a los conscriptos bajo las órdenes de los directores de las empresas capitalistas. Con estas medidas, explicaba, el gobierno habría querido demostrar “su profundo espíritu conservador” el que habría sido puesto en duda por “la prensa rica” a la vez que rivalizar con los elementos ugartistas que se hallaban muy bien representados en las empresas frigoríficas. (LV, 12-12-17)

El acto tuvo lugar el 15 de diciembre en la Plaza del Congreso. En él hablaron, entre otros, los diputados Antonio De Tomaso y Antonio Zaccagnini, y los dirigentes socialistas Agustín Muzzio y Felipe Di Tella. Di Tomaso subrayó la “doblez” del gobierno radical que pretendía proteger a los obreros pero permitía que fueran fusilados, que recibía a los delegados ferroviarios y les reconocía el derecho que les asistía en la huelga pero contemporizaba con las empresas ferroviarias permitiéndoles que prolongaran indefinidamente el conflicto. Al día siguiente La Vanguardia publicaba un largo editorial que enjuiciaba duramente la política radical. Señalaba que, aunque al llegar al radicalismo al gobierno habían manifestado un fundado escepticismo ante sus “pomposas promesas”, el hecho de haber surgido “de comicios realmente libres” y la creencia en que quienes habían asumido la tarea de “liquidar un régimen nefando y corrupto” reconocerían su responsabilidad histórica y saldrían de las vaguedades, había hecho a los socialistas adoptar una actitud de “benévola expectativa”. Señalaba a continuación que a catorce meses de gobierno poco había hecho el radicalismo para corresponder las manifestaciones de simpatía y confianza popular que había recibido. Luego de cuestionar la política monetaria y fiscal del gobierno, y su tendencia a desestimar al parlamento, La Vanguardia señalaba:

“luego de habernos hecho concebir alguna esperanza lisonjera, a raíz de su intervención enérgica cuando la huelga del ferrocarril Central Argentino, el nuevo gobierno no ha hecho sino desdecirse y ha agotado toda la gama de contradicciones en su vano empeño de servir a un tiempo intereses en pugna, sin atinar con una solución medianamente acertada, para acabar, como digno remate de tantas incongruencias, fusilando a mansalva a los trabajadores.”

El Editorial, luego de señalar similares contradicciones en lo que hace a la cuestión del trigo, del azúcar y del presupuesto, concluye confiado:

“la colosal mistificación que el radicalismo en el gobierno representa...toma dimensiones tales, que no ha de pasar inadvertida a los más obcecados en creer en las virtudes regeneradoras de la facción, y es de esperar que en los próximos comicios se vean las consecuencias.” (LV, 16-12-17)

El 20 de diciembre amparándose en la ley de Defensa Social la policía de Avellaneda procedió a desalojar el local de los obreros frigoríficos. La Vanguardia juzgó que muchos juzgaban que la ley de Defensa Social había caído en desuso los radicales mostraban “verdadera predilección” por dicha ley y la aplicaban contra el movimiento obrero “por las razones más fútiles”. Señalaba que siendo gente que había vivido por treinta años organizando motines y revueltas se habían convertido “de un día para otro en cuidadores a ultranza del ‘orden’ capitalista” no dudando para mantenerlo en emplear las armas nacionales contra los obreros. La Vanguardia señalaba que al tomar a su cargo la defensa de las empresas el gobierno hacía confuso para el público el sentido de la lucha, la que aparecía menos como un conflicto entre obreros y empresas que entre obreros y gobierno. Se concluía que el radicalismo realizaba una doble obra destructiva: por un lado, dificultaba su triunfo inmediato al oponer a los trabajadores el peso de sus fuerzas materiales; por otro y para el futuro, sembraba en las filas proletarias la confusión y la desconfianza “que él mismo se encarga de sembrar con su hipócrita política obrerista”. (LV, 21-12-17)

A comienzos de enero los trabajadores del ferrocarril del Sud manifiestan su solidaridad a los trabajadores de los frigoríficos negándose a transportar hacienda (LV 8-1-18). Al mismo tiempo la FORA discute la posibilidad de lanzar una huelga general en solidaridad. Smith (1983:77) explica que ésta amenaza habría hecho que el gobierno cambiara de curso e intentara, aunque tardíamente, volver a su política de “prescindencia”. A mediados de enero Cantilo anuncia que retiraría las fuerzas de la marina de los frigoríficos. La Vanguardia considera que esta orden era una “precisa confesión de la actitud antiobrera” que el gobierno había observado en el conflicto preguntándose no sólo por qué dicha actitud no se había tomado antes sino también “hasta cuándo duraría”. (LV, 18-1-18)

El cambio era tardío; la huelga sería derrotada. La Vanguardia responsabilizaría de ese resultado a un gobierno que, intentando desmentir a quienes lo acusaban de hostilizar a las empresas ligadas a los aliados, se habría “excedido en su servilismo” y ejercido todo tipo de coerción sobre los trabajadores. Pero en la explicación de La Vanguardia no estaba tampoco

ausente la política provincial y las futuras elecciones nacionales al señalar que el gobierno radical había “pactado una vergonzosa alianza...poniendo a la policía y al personal de la armada al servicio de una empresa a cuyo frente están conocidos tiburones del capital que son a la vez ilustres prohombres conservadores.” (LV, 31-1-18)

Epílogo. Las elecciones de 1918

Enfrentados a las ambigüedades del radicalismo los socialistas alternaron la denuncia con los esfuerzos por comprenderla y aún aprovecharla. La prédica más frecuente lo asimilaba a los “conservadores desalojados” con los que compartía el mismo personalismo y la misma falta de programas, ante lo cual sólo quedaba esperar que se produjera la anunciada simplificación¹⁸ que produciría fuerzas bien definidas.

Pero en otras ocasiones la mirada sobre el radicalismo era distinta. Se lo veía como una fuerza indecisa presionada por “las fuerzas del privilegio” en particular por la prensa. Así un Editorial de La Vanguardia señalaba que a partir de la huelga ferroviaria la prensa había lanzado “una verdadera campaña de intrigas organizada con el propósito de influir sobre el gobierno, para acabar de desorientarlo e inducirlo a que abandone toda reticencia, dejando a las grandes empresas ferroviarias libres de lo que pueda significar un obstáculo cualquiera a su desmedida prepotencia y avaricia.” El reconocimiento que, a regañadientes, los socialistas hacen de las diferencias del radicalismo respecto de “las fuerzas del privilegio”, es reafirmado por el llamado que la hoja socialista hace al gobierno a abandonar sus opiniones “singularmente confusas” en materia de derecho obrero para asumir “una actitud franca y definida, aplicando a las empresas alzadas contra los derechos del público y los obreros que las sirven el correctivo de la ley.” (18-11-17) En este caso la confusión que los socialistas observan en los radicales no era desvalorizada como un elemento puramente negativo a la espera de una simplificación que produciría fronteras claras sino que era valorada como una oportunidad para un acercamiento a través de la adopción de una política decididamente favorable a los sectores populares.

Sin embargo esta no sería la mirada predominante. Al concluir el año 1917 La Vanguardia señalaba el carácter doble del discurso radical y preguntaba:

“¿Cómo es posible creer en la sinceridad de las protestas de simpatía hacia la clase obrera con que el órgano oficial ameniza sus columnas, cuando asistimos a tantas y tan reiteradas muestras del cinismo del gobierno de sus entrañas?”

El diario socialista proponía una respuesta: afirmaba que al alternar sus actos reaccionarios con “las manifestaciones más pomposas de amor y respeto a las libertades públicas, el gobierno, al

¹⁸ A fines de noviembre un Editorial explicaba como los socialistas se proponían favorecer dicha simplificación, a la vez que desorganizar a las diferentes facciones. Señalaba que cuando la lucha de facciones llegara a su período más álgido los socialistas debían presentar la reforma de la ley azucarera o la del vino lo que haría que radicales y conservadores tucumanos y mendocinos abandonaran sus personalismos y se mostraran “perfectamente unidos para defender sus intereses gremiales contra los consumidores de todo el país.” (LV, 28-11-17)

que calificaba como “mezcla de jacobinismo e instrumento de sacristía”, buscaría mantener intacto el antiguo prestigio que le había permitido “pasar como ‘avanzado’ entre las momias de la política criolla, y por revolucionario entre los que hacen del uso de la violencia un culto y una finalidad.” La Vanguardia concluye señalando que tales fines serían posibles si lograra, como intenta, “detener el despertar político del pueblo, en el que entrevé una amenaza” (LV, 30-12-17). Para los socialistas quedaba claro que ese despertar político del pueblo se manifestaba en sus propias fuerzas y la amenaza, auguraban, comenzaría a concretarse en las futuras elecciones. Ya plenamente en campaña los intentos de comprensión o de acercamiento serían dejados de lado y el discurso socialista se centraría en la denuncia.¹⁹ La Vanguardia volvería sobre el balance del año 1917 para desmentir “la pretendida imparcialidad” del gobierno frente al movimiento obrero y, recordando el uso de fuerzas militares en las huelgas ferroviaria y frigorífica, señalar que “los atropellos, las detenciones de obreros y la clausura de locales gremiales han menudeado como en las peores épocas del llamado ‘régimen’”. El breve texto se cierra con cifras que buscan ser lapidarias: “26 muertos y más de 100 heridos” (LV, 5-2-18)

En el tramo final de la campaña los socialistas dejan en un segundo plano aún las referencias críticas a la política social del radicalismo y su alianza con los sectores dominantes para insistir en un discurso racionalista que buscaba desmitificar el discurso radical señalando las diferencias respecto de su práctica. Ese esfuerzo de desmitificación se apoyaba en una ideología de la transparencia que contrastaba la “mistificación, duplicidad y mentira” a la que debe recurrir el radicalismo con la unidad del Partido Socialista en el que teoría y práctica eran “dos aspectos de la batalla que desde hace más de veinte años iniciara en el país contra los resabios de la barbarie indígena que pugna por perpetuarse en el escenario de la política argentina”. El artículo concluía planteando una clara traducción del diagnóstico iluminista sobre la geografía política del país al señalar:

“Es posible que los llamados radicales consigan todavía engañar a los peones analfabetos del interior, a los que dominan con el alcohol y el juego ni más ni menos que como sus ‘adversarios’ los conservadores; lo que es imposible admitir es que el contraste entre sus teorías y los hechos pase inadvertido a los trabajadores y la gente sensata de la capital de la república”. (25-2-18)

¹⁹ En el curso de la campaña electoral los socialistas no sólo se enfrentan al radicalismo cuestionando, entre otros muchos puntos, su acción en los conflictos obreros sino disputando la paternidad acerca de las pocas iniciativas favorables a éstas que van siendo aprobadas. Así recuerdan que el proyecto de salario mínimo para los trabajadores del Estado que en esos días se discutía, había sido impulsado por los parlamentarios socialistas y que los radicales que ahora lo apoyaban, cuando antes se habían opuesto, lo hacían por motivos electorales, temiendo que el descontento de miles de trabajadores en los siguientes comicios (22-2-18)¹⁹ Dos días más tarde la disputa era también por demostrar que los socialistas eran los que habían propuesto las reformas a la ley de aduanas que, lentamente, se iban imponiendo (24-2-18). En uno y otro caso no se valoraba el cambio de posición de los radicales sino que se lo descalificaba como mero electoralismo y demagogia.

Esa “geografía política” daba a la elección de Capital el carácter de “prueba de fuego de la democracia argentina”. El día de la elección La Vanguardia llamaba a los ciudadanos a votar a los candidatos socialistas para detener “la dictadura que nos amenaza”. Argumentaba que la aplicación de la ley electoral había puesto de manifiesto que el país no se hallaba más cerca de la democracia que antes y que era necesario multiplicar el número de escuelas para dar al sufragio universal el contenido de cultura que se necesitaba y evitar “la resurrección del caudillaje.” Continuaba explicando que sólo las condiciones vigentes de ignorancia hacían posible “la historia asombrosa del triunfo radical” un partido sin programas que desalojó a sus adversarios sin aventajarlos siquiera en los procedimientos exteriores. Los socialistas buscaban tranquilizarse juzgando dicho el éxito radical que se extendía por toda la república, poniendo a prueba su modo racionalista de percibir la realidad, como “una situación anómala” y confiando en que las elecciones de Capital pondrían las cosas en su lugar. Así afirmaban:

“el triunfo de nuestro partido en la capital de la república tendrá un altísimo significado moral e histórico en el actual momento de la Argentina y del mundo, porque vendrá a robustecer la confianza de los que creemos en la lenta pero segura eficacia de nuestro método de acción, y equivaldrá a salvar de la ruina a la naciente y tan combatida legislación social, cuyo principio tanto costó imponer.” (LV, 3-3-18)

Pero tal pronóstico no se cumpliría. La “cultura” Capital Federal también daría el triunfo al radicalismo. Este sería incluso más amplio que dos años atrás. Una vez que los resultados comenzaran a hacerse públicos mostrando la magnitud de la derrota las respuestas socialistas no se limitaron a las tradicionales referencias a la falta de educación o al apoyo que los radicales habrían tenido de los sectores clericales sino que incluyeron la denuncia de la participación en la coalición radical y antisocialista de “amarillos” y “tartufos”- o dicho más claramente socialistas “argentinos” e “internacionales” (LV, 19-3-18). Las acusaciones de “traición” implicaban una velada confesión de que las sucesivas disidencias habían debilitado al PS no sólo por restarle militantes sino por quitarle el monopolio del nombre “socialista”. Unos y otros, pero sobre todo los “internacionales” que luego devendrían en comunistas, comenzarían a cuestionar la política del Partido Socialista frente al gobierno y al movimiento obrero. Las referencias a una connivencia entre estos sectores -a los que se agregarían los sindicalistas a quienes aún no se cuestionaba- y el radicalismo constituiría un tópico central de la prédica socialista futura.

Referencias

Diario La Vanguardia.

Godio, Julio (2000): *Historia del movimiento obrero argentino, 1870-2000 (Tomo I)* Buenos Aires, Corregidor.

Marotta, Sebastián (1961): *El movimiento sindical argentino. Su génesis y desarrollo. (Tomo II)* Buenos Aires, Ediciones Lacio.

Rock, David (1992): *El radicalismo argentino, 1890-1930.* Buenos Aires, Amorrortu.

Smith, Peter (1983): *Carne y política en la Argentina.* Buenos Aires, Paidós.